



**GUADALAJARA, JALISCO, 22 VEINTIDÓS DE ENERO DEL AÑO
2020 DOS MIL VEINTE.**

V I S T O para resolver en sentencia definitiva el Juicio Administrativo radicado con número de expediente anotado rubro, promovido por [REDACTED], en contra de la **SECRETARÍA DEL TRANSPORTE, SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA así como DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE GUADALAJARA, TODAS DEL ESTADO DE JALISCO.**

R E S U L T A N D O

1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal el día 16 dieciséis de enero del año 2019 dos mil diecinueve, [REDACTED], por su propio derecho, promovió juicio administrativo, atento a los motivos y consideraciones legales que del mismo se desprenden.

2.- En proveído de fecha 21 veintiuno de enero del año 2019 dos mil diecinueve, se admitió la demanda de referencia, teniéndose como Autoridades demandadas a las ya citadas, y como actos administrativos impugnados, los señalados en el escrito inicial de demanda, consistentes en:

- Cédulas de Notificación de Infracción folios 296141445 y 293487596 y sus accesorios, de la Secretaría del Transporte;
- Cédula de Notificación de Infracción de folio 3646004, de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco;
- Actualización y recargos del Refrendo Anual de Placas Vehiculares del año 2018 dos mil dieciocho, así como el crédito fiscal número 18004506538, de la Secretaría de la Hacienda Pública.

De igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas que se encontraron ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que su naturaleza lo permitió, requiriendo a las demandadas por los actos reclamados. De lo anterior, se ordenó correr traslado a las autoridades con las copias simples de la demanda inicial y documentos anexos, apercibidas que de no producir contestación en un término de 10 diez días se tendrían por ciertos los hechos que no fueran contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resulten desvirtuados.

3.- Por acuerdo de fecha 20 veinte de junio del año 2019 dos mil diecinueve, se tuvo a las autoridades, produciendo contestación a la demanda, oponiendo excepciones y defensas; de igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas, desahogándose aquellas que su naturaleza lo permitió y, toda vez que no acompañaron los actos requeridos previamente, se hizo efectivo el apercibimiento, teniéndose por ciertos los hechos que se pretendían acreditar con



dichas probanzas. De lo anterior, se ordenó correr traslado a la actora, para que ampliara su demanda.

4.- En actuación del 12 doce de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, se tuvo al actor ampliando su demanda en contra del Requerimiento con número de folio M418004207166 y su notificación, ordenando dar vista a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, produciendo contestación, por lo que el día 20 veinte de enero del año 2020 dos mil veinte, al no quedar pruebas pendientes por desahogar, se ordenó poner los autos a la vista de las partes para que dentro del término de 3 tres días formularan por escrito sus alegatos, surtiendo efectos de citación para el dictado de la sentencia definitiva correspondiente.

C O N S I D E R A N D O

I.- Esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, resulta competente para conocer y resolver la presente controversia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los numerales 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad, y los arábigos 1º, 4, 72, 73 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Jalisco.

II.- La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentran acreditados con las constancias que obran a fojas 6 seis y 24 veinticuatro a 26 veintiséis del Expediente en que se actúa, mismas que merecen valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido en los artículos 329, fracción VI, 336, 337, 399 y 403 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 de este último ordenamiento legal.

III.- Toda vez que no se hicieron valer causales de improcedencia y sobreseimiento y al no advertir la actualización de alguna, procede analizar la litis planteada por las partes, para lo cual, atento a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 50/2010, donde prevaleció la Jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, visible en la página 830 ochocientos treinta, Tomo XXXI, mayo de 2010 dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "*CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.*" los conceptos expresados por las partes no se transcriben de manera literal, al estimar que con ello no se causa perjuicio a quienes intervienen en el juicio; no obstante, se precisará en la presente resolución los puntos sujetos a debate derivados de la demanda, contestación y en su caso, la respectiva ampliación.



V.- Primeramente, en lo que respecta a las Cédulas de Notificación de Infracción emitidas por la Secretaria del Transporte del Estado de Jalisco, tomando en cuenta la manifestación de allanamiento por parte de la misma, respecto de la pretensión del accionante, se estima innecesario entrar al estudio de la Litis planteada acorde a lo dispuesto por el ordinal 42 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, mismo que para una mayor convicción se transcribe:

“...Artículo 42. Admitida la demanda en definitiva se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro del término de diez días. El plazo para contestar la ampliación de la demanda también será de diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que la admita. Si no se produce la contestación en tiempo, o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que no hubieren sido contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resulten desvirtuados.

(...)

En la contestación de la demanda y hasta antes del cierre de la instrucción, el demandado podrá allanarse a las pretensiones del demandante si se tratare de la autoridad, el magistrado podrá ordenar de inmediato la revocación del acto origen de la demanda o la expedición del acto que subsane la omisión, según sea el caso...”

Determinado lo anterior, este Juzgador declara procedente la pretensión del actor, toda vez que las enjuiciadas se allanaron a la misma, lo que implica su conformidad con lo pretendido y a la vez su renuncia expresa a su derecho de defensa, en consecuencia se revocan los actos impugnados consistentes en las Cédulas de Notificación de Infracción con números de folio 296141445 y 293487596 y sus accesorios, emitidas por la Secretaria del Transporte del Estado de Jalisco.

VI.- Por lo que ve a la diversa Cédula de Notificación de Infracción folio 3646004, emitida por la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, respectivamente, que se impugnan, atento a lo dispuesto por el numeral 72 de la Ley de la Materia, se analizan en primer término las causas de anulación que lleven a declarar la nulidad lisa y llana del acto reclamado, para lo cual, la parte actora alega en el primer concepto de impugnación que *el acto reclamado nunca le fue notificado, por lo que deberá declararse su nulidad.*

Analizados los argumentos vertidos por el demandante, se determina que le asiste la razón, a virtud que mediante acuerdo de fecha 20 veinte de junio del año 2019 dos mil diecinueve, se hizo efectivo el apercibimiento a la autoridad demandada respecto a tener por ciertos los hechos que el accionante pretendía acreditar con la exhibición del acto reclamado consistente en la Cédula de Notificación de Infracción folio 3646004, emitida por la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, respectivamente, la demandada omitió acompañar al juicio que nos ocupa, pese haber sido legalmente requerida por esta Sala Unitaria- por cuanto a la ilegalidad del mismo. En consecuencia, al no demostrar



el mandamiento por escrito, debidamente fundado y motivado, para sancionar a la sociedad promovente, se viola en su perjuicio las garantías previstas en el artículo 16 Constitucional, en relación con las fracciones I y III del numeral 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, pues, tomando en consideración la manifestación de la parte actora que nunca le fueron notificados dichos actos administrativos, desconociendo su contenido, resultaba obligación para las autoridades, al contestar la demanda, demostrar su existencia mediante la exhibición de los citados documentos públicos, conforme al segundo párrafo del numeral 36 de la Ley de Justicia Administrativa, atento a la solicitud presentada por la demandante, a efecto que ésta estuviera en condiciones de combatirlos mediante ampliación de demanda y, al no hacerlo de esa manera, lo procedente es declarar la nulidad lisa y llana de los actos reclamados.

Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 173/2011, visible a fojas 2645 dos mil seiscientos cuarenta y cinco del Libro III, Tomo 4 cuatro, diciembre de 2011 dos mil once, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA. *Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

Contradicción de tesis 169/2011. *Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno, Décimo Quinto y Décimo Séptimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 13 de julio de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida Buenrostro Martínez.”*

En esa tesitura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 74, en relación con la fracción II del diverso ordinal 75, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se declara la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa impugnada consistente en la Cédula de Notificación de Infracción folio 3646004, emitida por la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, al dictarse en contravención a las disposiciones legales aplicables.

VII.- Con respecto al Requerimiento con número de folio M418004207166, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública, la demandante



aduce que *no cuenta con los requisitos de validez, en razón que no fue notificado personalmente, además de no estar debidamente circunstanciada.*

Analizados los argumentos vertidos por el accionante, así como el acto en estudio y su notificación, visibles a fojas 25 veinticinco a 27 veintisiete del Expediente en que se actúa, se llega a la conclusión que efectivamente no le fue notificado de manera personal a la parte actora, lo que actualiza la causa de anulación contenida en la fracción II del artículo 75 de la Ley de Justicia Administrativa, al haberse dictado en contravención de lo dispuesto por el numeral 96 del Código Fiscal del Estado, tomando en consideración que **no se entendió la diligencia con el interesado o su representante legal, o que precediera citatorio debidamente notificado**, como lo ordena el precepto legal en cita, a saber:

“Artículo 96. Las notificaciones personales se harán en el domicilio de la persona, a quien se deba notificar, y que haya señalado ante las autoridades fiscales, en el procedimiento administrativo de que se trate, a falta de señalamiento, se estará a las reglas del artículo 47 de este código. Dichas notificaciones podrán practicarse en las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a quienes deba notificarse se presentan, por cualquier circunstancia en ellas, o en el lugar en que se encuentren, previa identificación.

Se entenderán con la persona que debe ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador, cerciorado de que sea el domicilio fiscal, dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que se le espere, a una hora fija del día siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más próximo.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se le hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia, cerciorado nuevamente el notificador de lo establecido en el párrafo anterior y de negarse éste a recibirla se realizará por instructivo que se fijará en la puerta del domicilio.

En el momento de la notificación se entregará al notificado o a la persona con quien se entienda la diligencia, copia del documento a que se refiere la notificación.

De las diligencias en que conste la notificación o cita, el notificador levantará acta circunstanciada por escrito.

Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán gastos de ejecución, a cargo de quien incurrió en el incumplimiento de la obligación.”

Si bien, la autoridad demandada acompaña el citatorio que se dejó el día 22 veintidós de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, el cual no circunstancia debidamente los motivos por los que no se entendió la diligencia con el interesado o su representante legal, o que se dejara con un tercero, lo que confirma la causa de nulidad decretada y nos lleva a declarar la nulidad de la notificación practicada, que pretendió enterar al justiciable de la Imposición y Requerimiento de Pago del Derecho de Refrendo Anual de Tarjeta de Circulación y Holograma folio



M418004207166, por lo que con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, procede declarar la nulidad lisa y llana de dicho requerimiento correspondiente al crédito fiscal número 18004506538.

Por cuanto a los recargos y actualización derivados del refrendo anual de placas vehiculares del año 2018 dos mil dieciocho, toda vez que la parte actora no expone argumento alguno mediante el cual combatir su legalidad y, en atención a lo alegado por la Secretaría de Hacienda Pública del Estado, lo procedente es, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reconocer la validez del crédito fiscal determinado por dichos conceptos, al no desvirtuar la presunción de legalidad que gozan. Ello en razón que la actora únicamente hace referencia en su tercer concepto de impugnación que *no se fundó y motivó la procedencia de recargos y actualización*; sin que se desprenda argumento alguno con tendentes a combatirlos en ningún sentido, por lo que no es posible para ese Juzgador la aplicación de la suplencia de la queja deficiente, atento al principio de igualdad jurídica y estricto derecho que rigen el juicio administrativo.

En esa misma tesitura, se confirma la validez de los recargos antes mencionados, tomando en consideración que los mismos son generados por el simple transcurso del tiempo ante la omisión puntual del pago de impuestos o derechos y los que, a diferencia de las multas y contrario a lo aducido por la actora, no tienen vida jurídica independiente del pago de refrendo anual de placas vehiculares que les da origen, por lo que no es necesaria la existencia de la emisión de un acto administrativo emitido por la autoridad fiscal, al resultar un derecho contenido en una norma autoaplicativa prevista en la Ley de Hacienda del Estado y la correspondiente Ley de Ingresos, de ahí, que el origen de actualizaciones y recargos se encuentran condicionados a la existencia de un crédito insatisfecho a cargo del contribuyente y no a la notificación de éste, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 71 del Código Fiscal del Estado, que dispone:

“Artículo 71. Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha, o dentro del plazo fijado por las leyes fiscales, el monto del mismo se actualizará desde el mes que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, de conformidad con el artículo 68 de este Código. Además, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco estatal por la falta de pago oportuno; dichos recargos se calcularán aplicando al monto de dicho crédito actualizado por el período a que se refiere este párrafo, la tasa establecida en la Ley de Ingresos del Estado por concepto de intereses, incrementada en un 50%.

Los recargos se causarán hasta por cinco años y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización por cheques devueltos a que se refiere el párrafo cuarto del artículo siguiente, los gastos de ejecución y las multas por infracciones a las leyes fiscales.

Cuando el pago hubiese sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la diferencia.



Los recargos se causarán a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, cuantificándose únicamente por el período transcurrido.

Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que calcule la Oficina de Recaudación Fiscal, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el remanente.

Cuando el contribuyente pague en forma espontánea y en una sola exhibición el total del crédito fiscal omitido, el importe de los recargos no excederá del 100% por ciento del crédito fiscal.

No se causarán recargos, cuando el contribuyente al pagar créditos fiscales en forma extemporánea, compense un saldo a su favor, hasta por el monto de dicho saldo, siempre que este se hubiera originado con anterioridad a la fecha en que debieron pagarse los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos de que se trate.

Cuando el saldo a favor del contribuyente se hubiera originado con posterioridad a la fecha en que se causaron los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, sólo se causarán recargos por el período comprendido entre la fecha en que debieron pagarse éstos y la fecha en que se originó el saldo a compensar.”

De lo anterior, se concluye que los recargos y actualizaciones no se encuentran sujetas a la notificación del crédito fiscal adeudado, o de algún acto administrativo por escrito, fundado y motivado, sino que se calculan desde el momento en que debió realizarse el pago y hasta la fecha en que se efectúe el mismo; de ahí, que se confirme la validez de los recargos y actualizaciones del crédito fiscal que no fue combatido en el presente juicio.

Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, 72, 73, 74 fracciones I y II y 75, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se resuelve a través de los siguientes:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO.- Se revocan los actos impugnados consistentes en las Cédulas de Notificación de Infracción con números de folio 296141445 y 293487596, y sus accesorios, emitidas por la Secretaria del Transporte del Estado de Jalisco, por allanamiento del Secretario del Transporte del Estado, a las pretensiones de la parte actora, como se establece en el Considerando V del presente fallo.

SEGUNDO.- La parte actora acreditó parcialmente los elementos constitutivos de su acción, en tanto que las autoridades demandadas justificaron parcialmente sus excepciones y defensas, en consecuencia;

TERCERO.- Se declara la nulidad lisa y llana de la Cédula de Notificación de Infracción folio 3646004, emitida por la Dirección de Movilidad y Transporte



de Guadalajara, así como del crédito fiscal número 18004506538 correspondiente al Requerimiento folio M418004207166, por concepto de multa y gastos de ejecución por omisión del pago de Refrendo Anual de Placas Vehiculares respecto del ejercicio fiscal del año 2018 dos mil dieciocho, emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, al dictarse en contravención a las disposiciones legales aplicables, atento a los motivos y fundamentos expuestos en los Considerandos VI y VII de la presente resolución.

CUARTO.- Se ordena a las demandadas la cancelación de las cédulas de notificación de infracción y crédito fiscal, descritos en los resolutivos Segundo y Cuarto del presente fallo, emitiendo el acuerdo correspondiente y realizando las anotaciones conducentes en el sistema informático con el que cuentan las autoridades demandadas.

QUINTO.- Se reconoce la validez del crédito fiscal por concepto de recargos y actualización derivados del Refrendo Anual de Placas Vehiculares respecto a los ejercicios fiscales 2018 dos mil dieciocho, al no desvirtuar la presunción de validez que gozan, atento a lo dispuesto en el último Considerando de la presente sentencia.

En virtud de que la presente sentencia se dicta dentro del término de ley establecido en el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa, y de conformidad con el artículo 109 del enjuiciamiento civil local aplicado supletoriamente en relación con el artículo 2 de la Ley de Justicia Administrativa, con la publicación que de esta se haga en el boletín judicial quedan debida y legalmente enteradas las partes del presente juicio.

**NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN JUDICIAL A LA PARTE ACTORA
Y POR OFICIO A LA PARTE DEMANDADA.**

Así lo resolvió y firma el Presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Magistrado Laurentino López Villaseñor, actuando ante la Secretario Patricia Ontiveros Cortés, que autoriza y da fe. -----

MAGISTRADO PRESIDENTE

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR

SECRETARIO

PATRICIA ONTIVEROS CORTÉS

LLV/POC/mavc



La Segunda Sala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán de observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.-----